

INFORME DE OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

(A los efectos del artículo 103, apartado 4, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra)

Se ha recibido en esta Intervención Delegada la siguiente propuesta de Resolución de la Directora General de Inclusión y Protección Social:

- Resolución por la que se abona a UTE Pauma S.L.- Centro Puente, los servicios prestados por el servicio de incorporación sociolaboral en el área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, durante el mes de diciembre del 2019, por un importe de 13.915,00 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 900003 91600 2600 231603 "Contratos de servicios de incorporación sociolaboral" del presupuesto de gastos del año 2020. Expediente contable número 03500001773.

El órgano gestor informa:

- Por Resolución 683/2015, de 14 de mayo, del Director General de Política Social y Consumo, se adjudicó el contrato para la prestación del servicio de incorporación sociolaboral en el área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla", a la UTE Pauma S.L.-Centro Puente, por el importe referido en el Informe de 11 de marzo, del órgano gestor, con un plazo de ejecución que finalizó el 31 de mayo de 2019.
- Desde el 1 de junio de 2019 se ha continuado sin cese la prestación del servicio, aun sin estar contratado y a instancia de la administración, por parte de la UTE Pauma S.L.- Centro Puente.
-
- La partida propuesta para el abono dispone de crédito adecuado y suficiente.

No obstante, habiéndose omitido el expediente de contratación y prescindido de los trámites previstos para él en la Ley Foral de Contratos, incluida la fiscalización previa

preceptiva del expediente, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 103, apartados primero, segundo y cuarto, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y se remite al efecto el presente informe al órgano gestor.

“Artículo 103. Omisión de fiscalización.

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente el expediente correspondiente hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en este artículo.

2. En dichos supuestos será preceptiva la emisión de un informe por quien en el ejercicio de la función interventora tenga conocimiento de dicha omisión. Dicho informe se remitirá al órgano gestor que hubiera iniciado las actuaciones y no tendrá naturaleza de fiscalización.

3. (...)

4. Si la Intervención manifiesta su opinión poniendo de relieve infracciones al ordenamiento jurídico o discrepancias con la actuación de los órganos de gestión, el expediente será trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución. En caso de que la resolución sea favorable, ello no eximirá de la exigencia de responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar”.

Sin otro particular,

LA INTERVENTORA DELEGADA EN EL
DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

Almudena Latorre Zubiri

17 de marzo del 2019

INFORME DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA E INCLUSIÓN SOCIAL

Propuesta de pago de la factura del mes de diciembre de 2019 referida al Equipo de Incorporación Sociolaboral en el área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla.

Primero.- La Dirección General de Política Social y Consumo, mediante contrato suscrito con fecha 01 de junio de 2015, adjudicó la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, a la UTE compuesta por Pauma S.L. y por Centro Punte.

El precio del contrato durante el periodo del 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2015 es de 97.405,00 euros (IVA incluido), siendo por tanto el importe mensual de 13.915,00 euros (IVA incluido).

La cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares especifica que el contrato podrá prorrogarse por acuerdo expreso de ambas partes, por anualidades vencidas, previa solicitud del contratista, siendo su duración máxima, incluidas las posibles prórrogas, de cuatro años.

El contrato se ha ido prorrogando mediante distintas Resoluciones de la Directora General de Inclusión y Protección Social, hasta llegar a la última prórroga, aprobada mediante Resolución 2163/2018, de 16 de noviembre, por la que se aprueba la prórroga durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019. A su vez, se autoriza y se dispone de un gasto de 69.575,00 euros correspondiente al periodo prorrogado.

Segundo.- El Pliego de Cláusulas Administrativas (nº 19, Prestación Económica: abono) establece que el abono de las contraprestaciones económicas se realizará a mes vencido, previa presentación de factura, con el visto bueno del Coordinador del Centro y de la Unidad Gestora del Contrato, confirmando que la misma responde a la ejecución del contrato en las condiciones en que se ha concertado y de acuerdo al precio de adjudicación, añadiéndole al mismo el IVA en caso de que la empresa esté sujeta a dicho impuesto.

Tercero.- Desde el día 1 de junio de 2019, el servicio de incorporación socio-laboral se viene prestando en situación de enriquecimiento injusto debido a la imposibilidad material en la gestión por parte del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social. Legalmente está calificado y definido en la Cartera de Servicios Sociales como una prestación garantizada y de atención ambulatoria, por lo que resulta obligatorio continuar con su prestación.

Cuarto.- El procedimiento de licitación del nuevo contrato ha sido iniciado estando en la actualidad en fase de elaboración de los informe técnicos y los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas particulares.

Conclusión

Por todo ello, el jefe de la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías manifiesta por un lado, la conformidad con la factura correspondiente a la actividad que la empresa ha venido desarrollando durante el mes de diciembre del presente año, y, por otro lado, el desarrollo del programa técnico conforme a las cláusulas del concurso, tal y como ha podido comprobarse a lo largo del seguimiento realizado por este Servicio.

En consecuencia, se considera acreditada la necesidad de que se siga prestando el servicio y, por tanto, que procede el abono en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, al mantenerse las circunstancias en que se realiza y recibe la prestación.

ENTIDAD	Pauma S.L. e Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón – Centro Puente PYCP UTE
N.I.F	U31892169
EJERCICIO PRESUPUESTARIO	2020
RESOLUCIÓN	2163/2018, de 16 de noviembre
PARTIDA PRESUPUESTARIA	900003-91600-2600-231603 "Contratos de servicios de incorporación sociolaboral"

Propuesta de pago mes de diciembre

IMPORTE	12.650,00 €
I.V.A.	1.265,00 €
TOTAL A PAGAR	13.915,00 €

Pamplona, a 11 de marzo de 2020

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE INCLUSIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN A LAS MINORIAS

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
PRIMARIA E INCLUSIÓN SOCIAL

Agustín Otazu Elcano

Loli Gutiérrez Urrestarazu

Conforme
LA INTERVENCIÓN

INFORME PROPUESTA

Elevo propuesta de Acuerdo de Gobierno de Navarra por el que se resuelven favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

Las disposiciones de gasto y ordenaciones de pagos propuestas tienen su fundamento en las prestaciones de servicios no sustentadas en una relación jurídica debidamente formalizada, al haber concluido previamente el plazo de ejecución de los contratos en su día suscritos, sin que en este momento se haya procedido a la adjudicación de un nuevo contrato, por los motivos que se señalan:

La Dirección General de Política Social y Consumo, mediante contrato suscrito con fecha 01 de junio de 2015, adjudicó la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, a la UTE compuesta por Pauma S.L. y por Centro Puente. La duración del mismo, incluidas las prórrogas se extendía hasta el 30 de mayo de 2019. (Resolución 683/2015, de 14 de mayo)

Desde el día 1 de junio de 2019, el servicio de incorporación socio-laboral se viene prestando en situación de enriquecimiento injusto debido a la imposibilidad material en la gestión por parte del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social. El procedimiento de licitación del nuevo contrato ha sido iniciado estando en la actualidad en fase de elaboración de los informe técnicos y los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas particulares.

Tal y como se informa en el expediente, debido a la trascendencia de los servicios, su prestación se considera imprescindible por lo que la empresa ha venido prestandolo aun no habiéndose podido formalizar regularmente la correspondiente relación jurídica.

En vista de que nos encontramos ante unas prestaciones ya debidamente ejecutadas pero sin el adecuado soporte contractual es forzoso explorar la posibilidad de acogerse a la teoría de la prohibición de enriquecimiento sin causa, construcción jurisprudencial en cuya virtud se palía, en determinadas condiciones, el indeseable desequilibrio que se produce cuando alguien que ejecuta una prestación sin el imprescindible basamento contractual, no ha generado por tal motivo el derecho a obtener el equivalente dinerario o en especie que le correspondería de haberse formalizado el oportuno contrato.

Son cuatro las condiciones que la jurisprudencia exige para poder aplicar esa doctrina (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1966, Sala de lo Civil, núm. 220):

- Un enriquecimiento por parte del demandado, representado por la obtención de una ventaja patrimonial, que puede producirse por un aumento del patrimonio (lucrum emergens) o por una no disminución del patrimonio (damnum cessans).
- Un empobrecimiento por parte del actor, representado a su vez por un daño, que puede constituir damnus emergens (daño positivo) y lucrum cessans (lucro frustrado), del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado.
- Falta de causa que justifique el enriquecimiento.
- Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

A ello añade la jurisprudencia que es también exigible del negocio jurídico que pretenda acogerse a este remedio el hecho de que se halle presidido por la buena fe.

Acreditado lo anterior en el expediente y habiéndose remitido las propuestas de resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Derechos Sociales, esta Intervención Delegada ha emitido informe de omisión de fiscalización a los efectos del artículo 103 de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, dado que la prestación de los servicios tras la finalización del contrato no fue fiscalizada en su momento, debiéndose remitir al Gobierno de Navarra la decisión final respecto de aquellos expedientes cuya fiscalización se haya omitido y que presenten alguna infracción del ordenamiento jurídico u otro defecto que impida su convalidación sin más trámite.

Y así, aun no ajustándose plenamente la contratación del caso a las disposiciones vigentes en materia de contratos públicos, debe procederse a pagar los servicios prestados, en virtud de la teoría en cuya virtud se persigue evitar los enriquecimientos injustos, con el fin de evitar así el perjuicio que deriva del hecho de haber prestado de buena fe unos servicios a la Administración y a su instancia sin haber percibido la oportuna contraprestación.

En su virtud, se propone al Gobierno de Navarra, que resuelva favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, por importe global de 41.745,00 euros, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto.

EL DIRECTOR GENERAL DE
PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Andrés Carbonero Martínez

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 25 de marzo de 2020, por el que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y a instancia de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, se resuelven favorablemente los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto, y se ordena la continuación del procedimiento para su abono.

La Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo propone aprobar la autorización y disposición del gasto de las facturas relacionadas en el anexo, a los efectos de proceder a su abono.

Las disposiciones de gasto y ordenaciones de pagos propuestas tienen su fundamento en las prestaciones de servicios no sustentadas en una relación jurídica debidamente formalizada, al haber concluido previamente el plazo de ejecución de los contratos en su día suscritos, sin que en este momento se haya procedido a la adjudicación de un nuevo contrato, según se justifica en el expediente administrativo.

Tal y como se informa en el expediente, debido a la trascendencia de los servicios, su prestación se considera imprescindible por lo que las empresas han venido prestándolos aun no habiéndose podido formalizar regularmente la correspondiente relación jurídica.

En vista de que nos encontramos ante unas prestaciones ya debidamente ejecutadas pero sin el adecuado soporte contractual, es forzoso explorar la posibilidad de acogerse a la teoría de la prohibición de enriquecimiento sin causa, construcción jurisprudencial en cuya virtud se palía, en determinadas condiciones, el indeseable desequilibrio que

se produce cuando alguien que ejecuta una prestación sin el imprescindible basamento contractual no ha generado por tal motivo el derecho a obtener el equivalente dinerario o en especie que le correspondería de haberse formalizado el oportuno contrato.

Son cuatro las condiciones que la jurisprudencia exige para poder aplicar esa doctrina (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1966, Sala de lo Civil, núm. 220):

- Un enriquecimiento por parte del demandado, representado por la obtención de una ventaja patrimonial, que puede producirse por un aumento del patrimonio (lucrum emergens) o por una no disminución del patrimonio (damnum cessans).

- Un empobrecimiento por parte del actor, representado a su vez por un daño, que puede constituir damnus emergens (daño positivo) y lucrum cessans (lucro frustrado), del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado.

- Falta de causa que justifique el enriquecimiento.

- Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

A ello añade la jurisprudencia que es también exigible del negocio jurídico que pretenda acogerse a este remedio el hecho de que se halle presidido por la buena fe.

Acreditado lo anterior en el expediente y habiéndose remitido las propuestas de resolución a la Intervención Delegada en el Departamento de Derechos Sociales, esta Intervención Delegada ha emitido informe de omisión de fiscalización a los efectos del artículo 103 de la Ley

Foral de la Hacienda Pública de Navarra, dado que la prestación de los servicios tras la finalización del contrato no fue fiscalizada en su momento, debiéndose remitir al Gobierno de Navarra la decisión final respecto de aquellos expedientes cuya fiscalización se haya omitido y que presenten alguna infracción del ordenamiento jurídico u otro defecto que impida su convalidación sin más trámite.

Y así, aun no ajustándose plenamente la contratación del caso a las disposiciones vigentes en materia de contratos públicos, debe procederse a pagar los servicios prestados, en virtud de la teoría en cuya virtud se persigue evitar los enriquecimientos injustos, con el fin de evitar así el perjuicio que deriva del hecho de haber prestado de buena fe unos servicios a la Administración y a su instancia sin haber percibido la oportuna contraprestación.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales,

ACUERDA

1.º Resolver favorablemente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, los expedientes de abono de las facturas relacionadas en el anexo, por importe global de 41.745,00 euros, conforme a la doctrina que prohíbe el enriquecimiento injusto, y ordenar la continuación del procedimiento para su abono.

2.º Trasladar este acuerdo al Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, a la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos

Sociales, a la Intervención Delegada y al Centro contable en el citado Departamento.

Pamplona, veinticinco de marzo de dos mil veinte.

EL CONSEJERO SECRETARIO
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Javier Remírez Apesteguía

ANEXO

CONTRATO	ENTIDAD A ABONAR	NIF	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	TARIFA	ABONO
EISOL Tafalla	UTE Pauma S.L.-Centro Puente	U31892169	012/2019	Abono diciembre 2019	13.915,00		13.915,00
EISOL Tafalla	UTE Pauma S.L.-Centro Puente	U31892170	001/2020	Abono enero 2020	13.915,00		13.915,00
EISOL Tafalla	UTE Pauma S.L.-Centro Puente	U31892171	002/2020	Abono febrero 2020	13.915,00		13.915,00
					41.745,00	0,00	41.745,00

RESOLUCIÓN 417/2020, de 26 de marzo, del Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, por la que se ordena el pago a la empresa “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” de la cantidad correspondiente a los gastos por enriquecimiento injusto del mes de diciembre de 2019, por la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral (EISOL) en el Área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla.

Por Resolución 683/2015, de 14 de mayo, del Director General de Política Social y Consumo, se adjudica el contrato para la prestación del Servicio de Incorporación Sociolaboral en el área de Atención Primaria de Servicios Sociales de Tafalla, a la empresa “UTE Pauma S.L.-Centro Puente” por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2015, o en su caso, al siguiente al de su formalización, y el 31 de diciembre de 2015.

De acuerdo con la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el contrato podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de ambas partes, por anualidades vencidas, previa solicitud del contratista, siendo su duración máxima, incluida las posibles prórrogas, de cuatro años

El contrato se ha ido prorrogando sucesivamente hasta que por Resolución 2163/2018, de 16 de noviembre, de la Directora General de Inclusión y Protección Social, se aprueba la prórroga durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019.

Presentada por parte de la empresa “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” la factura correspondiente al mes de diciembre de 2019 y, por tanto, una vez finalizado el contrato, el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social ha emitido informe en el que expresa haber verificado la realización de los trabajos por parte de la entidad y por consiguiente presta su conformidad a la factura presentada y propone su abono en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto.

Por Acuerdo de 25 de marzo de 2020 del Gobierno de Navarra se resuelven favorablemente determinados expedientes de abono, conforme a la doctrina del enriquecimiento injusto, entre los que se encuentra el que es objeto de la presente Resolución, por lo que procede el abono de la cuantía propuesta.

En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Derechos Sociales,

RESUELVO:

1º.- Autorizar, disponer y ordenar el pago (R350001587) a la “UTE Pauma S.L. – Centro Puente” (CIF U31892169) de la cantidad de 13.915,00 euros, como abono de la factura correspondiente al mes de diciembre de 2019.

El abono se realizará con cargo a la partida presupuestaria 900003-91600-2600-231603, denominada “Contratos de servicios de incorporación sociolaboral”, del Presupuesto de Gastos de 2020.

2º.- Notificar la presente Resolución a la “UTE Pauma S.L. – Centro Puente”, indicándole que contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.

3º.- Trasladar la presente Resolución al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, al Centro Contable de la Sección de Gestión Económica y Presupuestaria y al Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la Intervención Delegada en el citado departamento, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 26 de marzo de 2020

**EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

Andrés Carbonero Martínez